



ALEXANDER ARANA FLOR
RADICADO: 2024-00278
EK 2616217

Doctor:
JUAN CARLOS LASSO URRESTA.
Juzgado Noveno Administrativo Oral Del Circuito Judicial.
Cali - Valle del Cauca
E. S. D.

RADICACIÓN: 76001-33-33-009-2024-00278-00
DEMANDANTE: ALEXANDER ARANA FLOR
DEMANDADO: LA NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y OTROS.
MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA.

CLAUDIA CONSTANZA ALZATE CIFUENTES, identificada con la cédula de ciudadanía número 42'127.055 expedida en Pereira, con Tarjeta Profesional número 102.351 del Consejo Superior de la Judicatura, en mi calidad de apoderada, en virtud de la sustitución realizada por el APODERADO PRINCIPAL ESPECIAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, doctor GUSTAVO ALBERTO RENTERÍA, de conformidad al poder y sus anexos otorgado por la Coordinadora de la Unidad de Defensa de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la entidad, quien ostenta la calidad de representante legal con base en la delegación realizada por el señor Fiscal General de la Nación mediante Resolución No. 0-0259 del 29 de marzo del 2022, por medio del presente escrito me permito presentar contestación de la demanda impetrada por el señor ALEXANDER ARANA FLOR, a través de apoderado, dando respuesta a la misma en los siguientes términos:

I. FRENTE A LOS HECHOS DE LA DEMANDA

En relación con los hechos narrados por el apoderado de la parte actora, me permito manifestar que no me constan, y de los mismos no se evidencia acción u omisión en cabeza de mi representada de lo cual se pueda establecer alguna clase de responsabilidad que dé lugar a indemnización, razón por la que me atengo a lo que resulte probado, en legal forma dentro del proceso.

Las acciones y omisiones narradas, y que dice haber padecido el hoy demandante **ALEXANDER ARANA FLOR**, tal y como se desprende del texto de la demanda, no comprometen la responsabilidad administrativa y patrimonial de la Entidad que represento, toda vez que la Fiscalía General de la Nación no le ha causado Daño Antijuridico alguno al hoy demandante.

II. FRENTE A LAS DECLARACIONES Y CONDENAS

La Parte Actora por intermedio de apoderado, solicita en el libelo de la demanda:



ALEXANDER ARANA FLOR
 RADICADO: 2024-00278
 EK 2616217

1.- Que el MUNICIPIO DE PALMIRA, EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, LA NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, LA NACIÓN - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO (INPEC), LA NACIÓN - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS (USPEC), LA NACIÓN - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, LA NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-POLICÍA NACIONAL y LA NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, son responsables administrativamente por todos los perjuicios morales, materiales y perjuicios a los derechos constitucionalmente protegidos, causados a ALEXANDER ARANA FLOR, como consecuencia de las condiciones de hacinamiento sufridas desde el día 25 de enero de 2.022 hasta el día 04 de diciembre de 2.022, o el tiempo que se logre de demostrar en el transcurso del proceso, mientras se encontraba detenido en el Caí Comando Sur, del municipio de Palmira – Valle del Cauca.

2.- Que como consecuencia de la anterior declaración, el MUNICIPIO DE PALMIRA, EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, LA NACIÓN - RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, LA NACIÓN - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO (INPEC), LA NACIÓN - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS (USPEC), LA NACIÓN - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, LA NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-POLICÍA NACIONAL y LA NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, deben a ALEXANDER ARANA FLOR la totalidad de los perjuicios morales, materiales y perjuicios a los derechos constitucionalmente protegidos, de conformidad con la liquidación que de ellos se haga más adelante.

3.-Que la demandada cumpla la sentencia en los términos del artículo 140 del C.P.A.C.A.

4.- Por las costas y gastos del proceso.

En acatamiento a lo preceptuado por la Ley 1437 de 2011 y Ley 1564 de 2012 y los fundamentos jurisprudenciales, sobre el tema, me permito objetar la cuantía presentada por el apoderado de la parte actora, quien solicita se le reconozca y pague a sus mandantes las sumas por él establecidas, por concepto de perjuicios inmateriales a favor de ALEXANDER ARANA FLOR, como directamente afectado, en los siguientes términos:

EN CUANTO AL DAÑO MORAL.

En la demanda se pretende el reconocimiento y pago de 100 SMLMV, a favor de ALEXANDER ARANA FLOR.

Señor Juez, no está probado el sufrimiento y congoja manifestado por los accionantes, por lo cual no hay lugar a reconocer los perjuicios morales



ALEXANDER ARANA FLOR
 RADICADO: 2024-00278
 EK 2616217

pretendidos. Además, la suma solicitada por este concepto resulta exagerada y desproporcionada de acuerdo con la tasación efectuada por el **Consejo de Estado mediante Sentencia de Unificación Jurisprudencial de fecha 29 de noviembre de 2021-Rad.18001-23-31-001-2006-00178-01 (46681)**, aquí transcrita.

En acatamiento a lo preceptuado sobre el tema, por la Ley 1437 de 2011 y Ley 1564 de 2012 y los fundamentos jurisprudenciales transcritos, me permito, objetar la cuantía presentada por el apoderado de la parte actora, quien solicita se le reconozca y pague a su mandante las sumas por él establecidas, por concepto de perjuicios inmateriales a favor de ALEXANDER ARANA FLOR, como directamente afectado y su núcleo familiar.

EN CUANTO A LA AFECTACIÓN DE BIENES O DERECHOS CONSTITUCIONALMENTE PROTEGIDOS – HONRA, HONOR Y BUEN NOMBRE – PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD

Respecto a la afectación de bienes o derechos constitucionalmente protegidos, a la honra, honor y buen nombre, y a la privación injusta de la libertad, además de pertenecer una mismo concepto, se debe precisar que la máxima Corporación de lo Contencioso Administrativo adoptó la denominación de “alteración a las condiciones de existencia”, para efectos de indemnizar no sólo los daños ocasionados a la integridad física y/o psíquica, sino cualquier vulneración de bienes, prerrogativas, derechos o intereses diferentes a los señalados, o lo que es lo mismo decir, aquellas prerrogativas que sobrepasan la esfera de lo corporal del sujeto afectado, tales como la honra, el buen nombre, el daño al proyecto de vida, entre otras.

El H. Consejo de Estado en decisión del 1º de noviembre de 2012, exp. AG – 99, señaló:

“En el proceso se encuentra demostrado que el derrumbe del relleno sanitario Doña Juana alteró la calidad del aire a unos niveles que de acuerdo con diferentes estudios y monitorias técnicas no constituían un riesgo para la Salud Humana. Sin embargo, esta conclusión no desmiente el hecho de que la calidad del aire de las áreas afectadas disminuyó ostensiblemente llevando no sólo a los espacios públicos sino al interior de los hogares aromas fétidos y nauseabundos, los cuales perduraron aproximadamente seis meses lo que generó un cambio en los hábitos de los núcleos familiares. Se trata así de una injerencia arbitraria atentatoria del derecho a la intimidad, comoquiera que esta situación trajo como consecuencia: modificación en las costumbres alimenticias (muchos alimentos se dañaban rápidamente), la necesidad de controlar vectores como ratas y moscos y en algunos casos el traslado de residencia.



ALEXANDER ARANA FLOR
 RADICADO: 2024-00278
 EK 2616217

“De igual forma, está acreditado que la alteración de las condiciones ambientales ocasionó que las actividades que la comunidad acostumbraba a realizar al aire libre y en espacios públicos se disminuyeran significativamente, afectándose el derecho a la recreación y a la libre utilización del tiempo libre. En otros términos, la posibilidad de realizar labores encaminadas a la diversión, entretenimiento y práctica del deporte para aliviar el cansancio propio del trabajo y del estudio se vio restringida pues las opciones mientras duraron la fetidez en el olor eran las de evitar salir de las casas o buscar lugares apartados del lugar de residencia en los que no se hubiera presentado la afectación ambiental o en donde ésta se hubiere dado con menor intensidad.

“Así las cosas, como consecuencia de la catástrofe ambiental se produjo un daño en los derechos a la intimidad familiar y a la recreación y utilización del tiempo libre. De acuerdo con lo expuesto en el apartado anterior, la filosofía incorporada por la constitución política de 1991 en materia de responsabilidad civil extracontractual es la de imponer en cabeza de las autoridades públicas una obligación de carácter indemnizatorio por cualquier daño que se cause sobre un bien jurídicamente protegido. De forma tal que el juez como operador jurídico, apelando a la categorización de perjuicios inmateriales opta por ordenar un resarcimiento haciendo una diferenciación de los derechos conculcados.

“Por consiguiente, la falla del servicio del Distrito sí produjo un daño referido a la violación de los derechos a la intimidad familiar y a la recreación y utilización del tiempo libre de los demandantes, circunstancia por la cual se declarará la responsabilidad y se reconocerá la indemnización precisada y, por último, se adoptarán de oficio medidas de justicia restaurativa, en aras de restablecer el núcleo esencial de los derechos fundamentales lesionados”.

Pues bien, la parte actora considera que el perjuicio por este concepto está dado por la alteración de las condiciones de vida padecidas por el detenido, lo que a juicio de este togado corresponde a una calificación del perjuicio moral, por lo que estaríamos frente a una doble pretensión por el mismo concepto, amén de que no obra prueba en el expediente que permita demostrar la existencia de tales alteraciones.

En efecto, aduce los demandantes que presuntamente padecieron un perjuicio moral, pero no se demuestra que hubieran visto afectado otros bienes, intereses o derechos constitucionales que pudieran ser reconocidos de manera autónoma e independiente, de conformidad con los recientes lineamientos de la jurisprudencia de la Corporación que no admite categorías abiertas de perjuicios, sino la reparación o resarcimiento de los derechos, intereses legítimos o bienes constitucionalmente protegidos, esto es, una tipología de perjuicios fundamentada en la vulneración a garantías constitucionales consideradas en sí mismas, siempre y cuando se demuestre a través de los diferentes instrumentos o mecanismos



ALEXANDER ARANA FLOR
RADICADO: 2024-00278
EK 2616217

probatorios reconocidos por la ley, que es necesario el reconocimiento de un perjuicio autónomo (v.gr. daño a la salud, daño a la libertad, daño a la familia, etc.) en aras de compensar o retribuir la afectación o lesión padecida al respectivo derecho.

Con todo, en el evento de ser probada la responsabilidad estatal aquí pretendida, respetuosamente solicito se niegue esta pretensión por la *afectación de bienes o derechos constitucionalmente protegidos*, por no estar demostrados, y en su lugar se tasen a la justa proporción los daños morales.

EN CUANTO A LOS PERJUICIOS MATERIALES

Pretende la parte actora el reconocimiento del daño emergente en razón a los salarios mínimos dejados de percibir dentro del periodo de reclusión, empero, no es posible su reconocimiento toda vez que no existe medios de prueba que acrediten dicho daño.

Además, la víctima directa no detalla la razón de su cuantía, no aporta prueba en la que se constate que el señor ALEXANDER ARANA FLOR percibía antes del tiempo de su detención un ingreso mensual, desconociendo los límites establecidos en la jurisprudencia del H. Consejo de Estado en aquellos eventos de no acreditación de un salario fijo.

III.- FUNDAMENTACION JURIDICA Y FACTICA

3.1.- DAÑO ANTIJURIDICO.

El artículo 90 de la Constitución Política, *establece una cláusula general de responsabilidad del Estado*, al señalar que éste responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, y que sean causados por la acción u omisión de las autoridades en ejercicio de sus funciones.

Lo anterior nos indica que, cuando se pretende la declaración de responsabilidad del Estado, es fundamental PROBAR LA EXISTENCIA DEL DAÑO cuya reparación se pretende frente al caso de hacinamiento en centro de reclusión transitoria, que dice haber padecido ALEXANDER ARANA FLOR.

En ese orden, tenemos que, la conducta atribuida a la Fiscalía General de la Nación, es el HACINAMIENTO que padeció el hoy demandante, quien fue cobijado con medida de detención preventiva en centro carcelario, mientras permaneció en cumplimiento de dicha imposición ordenada por un Juez de Control de Garantías, en centro transitorio de reclusión, toda vez que con ello se contribuyó PRESUNTAMENTE a la pretensión de la reparación por el Título Jurídico de Imputación denominada FALLA EN EL SERVICIO en la persona de ALEXANDER ARANA FLOR; luego la imputación de este daño debe analizarse



ALEXANDER ARANA FLOR
RADICADO: 2024-00278
EK 2616217

desde la óptica de que todas las actuaciones de la Fiscalía durante el tiempo en que tuvo y pudo conocer de los hechos, fueron y estuvieron ajustadas al análisis jurídico que en su competencia constitucional y legal podía desplegar mi representada, como fue llevar ante el Juez de Control de Garantías a los posibles infractores de la ley, imputarles los cargos acreditados con los elementos materiales probatorios existentes (E.M.), y solicitar la medida de aseguramiento necesaria, conforme a los delitos imputados, lo que efectivamente sucedió en atención a lo expuesto por la parte actora en el escrito de demanda; no ocurriendo igual en el caso de los Terceros (MUNICIPIO DE PALMIRA, EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, LA NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, LA NACIÓN - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO (INPEC), LA NACIÓN - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS (USPEC), LA NACIÓN - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, LA NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-POLICÍA NACIONAL)

Lo afirmado por la parte actora **No** puede interpretarse o inferirse subjetivamente como una actuación irregular o ilegal, y en ese sentido, el presunto daño irrogado a los demandantes NO puede considerarse como una afectación coadyuvada por la FGN. La imputación de responsabilidad administrativa por cuenta de una potencial acción de reparación directa contra Fiscalía no puede ni debe aplicarse en forma mecánica o instrumental como lo da a entender la parte actora, porque “acaeció un hacinamiento” y como consecuencia de ello se produjo la “violación a vida digna” del hoy demandante.

No existen motivos para concluir, que la Fiscalía General de la Nación debe responder administrativa y patrimonialmente en relación con los hechos que son objeto del presente medio de control de Reparación Directa, argumenta la parte actora que debe ser condenada mi representada por **el hacinamiento** y como resultado de ello la “violación a la dignidad humana” padecida por el hoy demandante, mientras permaneció en el centro transitorio de reclusión como fue en el “**Caí Comando Sur, del municipio de Palmira – Valle del Cauca**”, y en atención que la función de reclusión de los imputados y/o procesados, es de competencia exclusiva del INPEC; en consecuencia, no podemos predicar en este caso, que la misma deba entenderse como DAÑO ANTIJURIDICO por FALLA DEL SERVICIO, imputable a la Fiscalía General de la Nación.

La Fiscalía General de la Nación adelantó la correspondiente investigación contra ALEXANDER ARANA FLOR, de conformidad con los lineamientos que le otorga la Constitución Política de 1991: “(...) ARTICULO 250 -Modificado. A. L. 3/2002, art. 2º:

“(...) La Fiscalía General de la Nación está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito que lleguen a su conocimiento por medio de



ALEXANDER ARANA FLOR
RADICADO: 2024-00278
EK 2616217

denuncia, petición especial, querella o de oficio, siempre y cuando medien suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible existencia del mismo. No podrá, en consecuencia, suspender, interrumpir, ni renunciar a la persecución penal, salvo en los casos que establezca la ley para la aplicación del principio de oportunidad regulado dentro del marco de la política criminal del Estado, el cual estará sometido al control de legalidad por parte del juez que ejerza las funciones de control de garantías. Se exceptúan los delitos cometidos por miembros de la fuerza pública en servicio". Y las normas legales procedimentales que lo reglamentan. (...)"

En atención al Daño Antijurídico alegado por los demandantes, es importante reiterar que en la demanda no se cuestiona la actuación de la Fiscalía en el ejercicio de su función misional (Art. 250 C.P.), es decir **que no se cuestiona a la FGN por la solicitud de medida de aseguramiento -privación de la libertad del hoy demandante.**

Por lo cual, no cabe la menor duda de que no existe nexo causal entre el Daño Antijurídico reclamado y la actuación de la Fiscalía General de la Nación, porque todo el procedimiento realizado por las autoridades estatales que intervinieron en la imposición de la medida de aseguramiento de privación preventiva de la libertad del hoy demandante, y de conformidad con lo establecido en la demanda, se ajustó total y absolutamente a la CONSTITUCIÓN POLÍTICA, A LA LEY, Y LA CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

IV. EXCEPCIONES

4.1.- INEXISTENCIA DEL DAÑO ANTIJURIDICO.

Es importante reiterar, que el artículo 90 de la Carta Política determina que el Estado responderá patrimonialmente por daños, pero no cualquier clase de daños, en ella se señala expresamente que son los denominados ANTIJURÍDICOS, agregando además "que le sean imputables", causados ya sea por acción o por omisión de las autoridades.

La FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, obró de conformidad con la obligación y funciones establecidas en el Artículo 250 de la Carta Política, así como en las normas sustantivas y procesales vigentes para la época de los hechos, concluyendo así la INEXISTENCIA DE FALLA DEL SERVICIO, verificándose que la Entidad que represento no incurrió en ninguna clase de error, por las condiciones de hacinamiento en centro de reclusión transitoria, que manifiesta haber padecido el hoy demandante ALEXANDER ARANA FLOR y por lo cual pretende se declare la responsabilidad extracontractual del Estado.

No existen pruebas que permitan establecer que la FGN puede tener algún tipo de responsabilidad administrativa en relación con los hechos que son objeto de la



ALEXANDER ARANA FLOR
RADICADO: 2024-00278
EK 2616217

presente demanda, pues la parte actora, argumenta que debe ser condenada la FGN por el hacinamiento y violación a la dignidad humana, padecida por el demandante, mientras permaneció en el centro transitorio de reclusión, puesto que la función de reclusión y custodia de los imputados, es de competencia exclusiva del INPEC; en consecuencia, no podemos predicar en este caso, que la misma deba entenderse como DAÑO ANTIJURIDICO por falla del servicio, que deba ser reparado por el Estado y de manera particular, por la Fiscalía General de la Nación.

4.2.- FALTA DE LEGITIMACION EN LA CAUSA POR PASIVA.

La legitimación en la causa constituye un presupuesto procesal para obtener decisión de fondo. ***La legitimación en la causa no se identifica con la titularidad del derecho sustancial sino con ser la persona que por activa o por pasiva es la llamada a discutir la misma en el proceso.***

La Fiscalía General es una entidad independiente adscrita al poder judicial en Colombia que nació con la Constitución Política de 1991 y entró en funcionamiento desde el primero de julio de 1992, con el objetivo institucional de fortalecer la capacidad investigativa del Estado en materia penal para la lucha contra la criminalidad, garantizando el acceso a una justicia eficaz y garantista, participando de manera efectiva en la formulación de la política del Estado en materia criminal.

Bajo este entendido, en el caso de marras, no queda sino predicar, que estamos en presencia del fenómeno jurídico –procesal de la FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA-, si se parte del concepto de que ésta “*se consagra como la facultad procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido material*”. (Corte Constitucional, sentencia T-416 de 1997).

Se arriba a esta conclusión, de acuerdo a los considerandos vertidos sobre la inoponibilidad de la relación sustancial examinadas con las facultades que el ordenamiento jurídico asigna a mi representada, pues si según la precitada sentencia la legitimación en la causa es la calidad subjetiva reconocida a las partes en relación con el interés sustancial que se discute, la misma Corporación sostiene que “*... cuando una de las partes carece de dicha calidad o condición, no puede el juez adoptar una decisión de fondo, o en caso de que ello ocurra, la misma no puede resultar favorable a los intereses procesales de aquella.*” (Sentencia C-965 de 2003).

El extremo activo de la litis exige la declaración de la responsabilidad administrativa de las entidades demandadas, y si en su sentir se omitió el deber



ALEXANDER ARANA FLOR
RADICADO: 2024-00278
EK 2616217

de protección a los convocantes, en los centros transitorios de reclusión, donde fueron ubicados, una vez se resolvió su situación jurídica con medida de aseguramiento de detención intramural, y pasadas treinta y seis (36) horas luego de su ingreso a los establecimientos de detención transitoria, no puedan ser trasladados de inmediato a la Cárcel de San Sebastián de Ternera, u otro establecimiento carcelario o penitenciario a cargo del INPEC donde cumplan la medida de aseguramiento, debido al grave hacinamiento que, se presenta también en estas instituciones, se hace necesario establecer de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico, que entidades tienen bajo su responsabilidad las personas que están cumpliendo con una medida de detención privativa de la libertad. Es claro en este caso establecer que la responsabilidad de los detenidos en centros transitorios está a cargo del INPEC y de las entidades territoriales, ósea del municipio de Palmira.

En el Código Penitenciario y Carcelario, establece:

“ARTÍCULO 15. SISTEMA NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO. Modificado por el art. 7, Ley 1709 de 2014. El Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario está integrado por el Ministerio de Justicia y del Derecho; el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), como, adscritos al Ministerio de Justicia y del Derecho con personería jurídica, patrimonio independiente y autonomía administrativa; por todos los centros de reclusión que funcionan en el país; por la Escuela Penitenciaria Nacional; por el Ministerio de Salud y Protección Social; por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y por las demás entidades públicas que ejerzan funciones relacionadas con el sistema.

El sistema se regirá por las disposiciones contenidas en este Código y por las demás normas que lo adicionen y complementen.

ARTÍCULO 17. CARCELES DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES. Corresponde a los departamentos, municipios, áreas metropolitanas y al Distrito Capital de Santafé de Bogotá, la creación, fusión o supresión, dirección, y organización, administración, sostenimiento y vigilancia de las cárceles para las personas detenidas preventivamente y condenadas por contravenciones que impliquen privación de la libertad, por orden de autoridad policiva.

Mientras se expide la ley que atribuya a las autoridades judiciales el conocimiento de los hechos punibles sancionables actualmente con pena de arresto por las autoridades de policía, éstas continuarán conociendo de los mismos. Los castigados por contravenciones serán alojados en pabellones especiales. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario ejercerá la inspección y vigilancia de las cárceles de las entidades territoriales.



ALEXANDER ARANA FLOR
RADICADO: 2024-00278
EK 2616217

En los presupuestos municipales y departamentales, se incluirán las partidas necesarias para los gastos de sus cárceles, como pagos de empleados, raciones de presos, vigilancia de los mismos, gastos de remisiones y viáticos, materiales y suministros, compra de equipos y demás servicios.

Los gobernadores y alcaldes respectivamente se abstendrán de aprobar o sancionar según el caso, los presupuestos departamentales y municipales que no llenen los requisitos señalados en este artículo.

La Nación y las entidades territoriales podrán celebrar convenios de integración de servicios, para el mejoramiento de la infraestructura y el sostenimiento de los centros de reclusión del sistema penitenciario y carcelario.

ARTÍCULO 21. CÁRCELES Y PABELLONES DE DETENCIÓN PREVENTIVA. Modificado por el art. 12, Ley 1709 de 2014. Las cárceles y pabellones de detención preventiva son establecimientos con un régimen de reclusión cerrado. Estos establecimientos están dirigidos exclusivamente a la atención de personas en detención preventiva en los términos del artículo 17 de la Ley 65 de 1993, los cuales están a cargo de las entidades territoriales.

De las anteriores normas se concluye que es responsabilidad del INPEC Y DEL MUNICIPIO DE PALMIRA, salvaguardar los derechos de los detenidos en centros transitorios de detención, y no de la Fiscalía General de la Nación. Por las razones expuestas **NO** es mi representada la llamada a responder por los perjuicios reclamados por los convocantes.

4.3.- INEXISTENCIA DE LA RELACIÓN DE CAUSALIDAD ENTRE LA ACTUACIÓN DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN Y EL DAÑO ALEGADO.

El nexo causal es la relación necesaria y eficiente entre el hecho generador del daño y el daño probado. La jurisprudencia ha establecido que para poderle atribuir un resultado a una Entidad y declararlo responsable como consecuencia de su acción u omisión, es necesario definir si aquel aparece ligado a esta por una relación de causa-efecto.

Señor Juez, de encontrarse probada la existencia de un daño antijurídico, se debe absolver de todas las pretensiones a la Fiscalía General de la Nación, en razón que el daño probado no se le puede imputar a ella, al evidenciarse que no existe



ALEXANDER ARANA FLOR
 RADICADO: 2024-00278
 EK 2616217

una relación efecto-causa entre la actuación de la Fiscalía y el daño a indemnizar, por lo que se predica una ausencia de nexo causal.

La jurisprudencia ha establecido que para poder atribuirle un resultado a una persona y declararlo responsable como consecuencia de su acción y omisión, es necesario definir si aquel aparece ligado a esta por relación causa-efecto. En consecuencia, el hecho generador del daño que se reclama a indemnizar no es otro que el *hacinamiento y vulneración a la dignidad humano* del ciudadano ALEXANDER ARANA FLOR, donde un juez de Control de Garantías ordenó la medida de aseguramiento en centro carcelario.

Es menester, manifestar que en presencia de un hasta ahora presunto Daño Antijurídico en contra el ciudadano ALEXANDER ARANA FLOR, configurado como lo manifiesta el apoderado de la parte actora bajo el Título Jurídico de Imputación denominado FALLA DEL SERVICIO, si hubiere lugar a su reconocimiento y posterior reparación, no sería en cabeza de la FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN, puesto que como se ha logrado evidenciar, la parte actora busca dicho reconocimiento en razón del ***hacinamiento y vulneración a la dignidad humana***, padecida durante el tiempo que permaneció recluido en el CAI COMANDO SUR, cumpliendo con la medida de aseguramiento intramural, impuesta por un Juez de la república, luego quienes detentan la posición de Garantes y a quienes compete la protección y cuidado de los detenidos en centros transitorios tal y como lo establece la ley 65 de 1993, son Entidades diferentes a mi representada, para el caso en concreto, la responsabilidad se dirige al MUNICIPIO DE PALMIRA y/o INPEC.

Según lo dispone la ley 65 de 1993 (Código Penitenciario y Carcelario) en los artículos 17, 18 y 19, la responsabilidad de las personas detenidas provisionalmente le corresponde a los entes territoriales (municipales y departamentales):

ARTÍCULO 17. CARCELES DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES.
Corresponde a los departamentos, municipios, áreas metropolitanas y al Distrito Capital de Santafé de Bogotá, la creación, fusión o supresión, dirección, y organización, administración, sostenimiento y vigilancia de las cárceles para las personas detenidas preventivamente y condenadas por contravenciones que impliquen privación de la libertad, por orden de autoridad policiva.

Mientras se expide la ley que atribuya a las autoridades judiciales el conocimiento de los hechos punibles sancionables actualmente con pena de arresto por las autoridades de policía, éstas continuarán conociendo de los mismos. Los castigados por contravenciones serán alojados en pabellones especiales. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario ejercerá la inspección y vigilancia de las cárceles de las entidades territoriales.



ALEXANDER ARANA FLOR
RADICADO: 2024-00278
EK 2616217

En los presupuestos municipales y departamentales, se incluirán las partidas necesarias para los gastos de sus cárceles, como pagos de empleados, raciones de presos, vigilancia de los mismos, gastos de remisiones y viáticos, materiales y suministros, compra de equipos y demás servicios.

Los gobernadores y alcaldes respectivamente se abstendrán de aprobar o sancionar según el caso, los presupuestos departamentales y municipales que no llenen los requisitos señalados en este artículo. La Nación y las entidades territoriales podrán celebrar convenios de integración de servicios, para el mejoramiento de la infraestructura y el sostenimiento de los centros de reclusión del sistema penitenciario y carcelario.

ARTÍCULO 18. INTEGRACIÓN TERRITORIAL. Los municipios podrán convenir la creación, organización, administración y sostenimiento conjunto de los establecimientos de reclusión.

ARTÍCULO 19. RECIBO DE PRESOS DEPARTAMENTALES O MUNICIPALES. Los departamentos o municipios que carezcan de sus respectivas cárceles, podrán contratar con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, el recibo de sus presos mediante el acuerdo que se consagrará en las cláusulas contractuales, conviniendo el reconocimiento que los departamentos o municipios hagan del pago de los siguientes servicios y remuneraciones: a) Fijación de sobresueldos a los empleados del respectivo establecimiento de reclusión; b) Dotación de los elementos y recursos necesarios para los internos incorporados a las cárceles nacionales; c) Provisión de alimentación en una cuantía no menor de la señalada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario para sus internos; d) Reparación, adaptación y mantenimiento de los edificios y de sus servicios, si son de propiedad de los departamentos o municipios. PARÁGRAFO. Las cárceles municipales podrán recibir presos nacionales en las mismas condiciones en que los centros de reclusión nacionales reciben presos municipales.

Pretende el apoderado de la parte actora afianzar su reclamación en el fallo de tutela **T-018 de 2019**, pero dentro de las pruebas aportadas no reposa dicha providencia, lo que nos impide tener certeza de los términos en el que el Despacho resolvió la acción constitucional, pues en este sentido la parte demandante no cumplió con su deber procesal de la carga de la prueba, en consecuencia, NO puede concluirse que la conducta de la FGN fue causa eficiente y determinante en la producción del daño antijurídico alegado por los actores.

V. PETICIONES

5.1.- Que se declaren las excepciones propuestas o las que se encuentren probadas, y se denieguen las pretensiones de la demanda.



ALEXANDER ARANA FLOR
RADICADO: 2024-00278
EK 2616217

5.2.- Que se desechen por improcedentes todas y cada una de las pretensiones de la parte demandante, por las razones fácticas y jurídicas establecidas en este memorial, y en su lugar se declare que la Nación-Fiscalía General de la Nación No tiene responsabilidad administrativa ni patrimonial en los hechos que originaron este proceso ordinario de reparación directa.

5.3.- Decretar la acumulación del presente proceso de aquellos que fundamenten en igualdad de hechos, pretensiones y procedimiento, conforme lo señalado en el artículo 165 del CPACA y en virtud del principio de la economía procesal.

VI. ANEXOS.

- Poder para actuar.
- Sustitución de poder
- Fotocopia de la resolución de nombramiento y del acta de posesión de la coordinadora de la Dirección Jurídica.
- Fotocopia de la Resolución N° 0-0529 del 29 de marzo del 2022.
- Fotocopia de la resolución de nombramiento y del acta de posesión de la suscrita.

VII. NOTIFICACIONES

Las recibiré en la Carrera 8 # 42B-50 /Torre A Piso 1 - Dirección de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General de la Nación Seccional Pereira, en la Secretaría del Juzgado y en los correos electrónicos jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co gustavo.renteria@fiscalia.gov.co y claudiac.alzate@fiscalia.gov.co.

Del Honorable Juez,

CLAUDIA CONSTANZA ALZATE CIFUENTES

C.C. 42'127.055

T.P. 102.351 del C.S. de la J.